

INFORME / EL CASO, DICE EL PROCURADOR, PUEDE QUEDAR IMPUNE

Procuraduría halló grave manipulación en Guaitarilla

La cadena de fallas cometidas tras la muerte de 7 policías y 4 civiles implicaría a 5 autoridades: Justicia Militar, Sijin, Fiscalía, Medicina Legal y la Inspección local.

REDACCIÓN JUSTICIA

Un panorama caótico encontró la Procuraduría a la hora de revisar las pruebas recogidas en el caso Guaitarilla.

Ninguna de las cuatro autoridades de investigación que llegaron al sitio de los hechos hizo la tarea como los correspondía y, lo que es peor, se manipularon de tal manera las pruebas que el Ministerio Público considera que es posible que nunca se descubra la verdad de lo que ocurrió a la medianoche del 19 de marzo en ese paraje de Nariño.

En los últimos días, casi ocho meses después de que murieron siete policías y cuatro civiles a manos de militares, el procurador Edgardo Maya revió a este diario que podría verse obligado a archivar la investigación.

"Todos los que intervinieron cometieron irregularidades", puntualizó visiblemente preocupado. Y añadió: "La investigación está enfocada a resolver si los policías fueron ejecutados o muertos en combate. Las pruebas no nos han permitido saberlo y la mitad de los testigos están muertos".

EL TIEMPO conoció algunas de las principales irregularidades detectadas por la Procuraduría tanto en el mismo sitio de las muertes como, después, en la morgue de Medicina Legal a la hora de hacer las necropsias.

Festín con las pruebas

La escena fue dominada durante más de las primeras seis horas por el Ejército, sin que existiera documentación de la preservación en ella de los elementos materiales de prueba", es una de las primeras advertencias que hace la Procuraduría.

Luego, ninguna de las cuatro autoridades de investigación que llegaron al lugar —Justicia Penal Militar, Inspección de Guaitarilla, Fiscalía y Sijin Nariño— protegió debidamente las evidencias y las fotografías que tomaron no cumplen con los parámetros mínimos de investigación.

El Ministerio Público confirma que la escena fue manipulada porque, por ejemplo, las armas adjudicadas a ciertos policías no corresponden con las que aparecen al lado de cada uno. En los videos se ve una bolsa de siero cerca de un cadáver, "sin que exista explicación lógica para ello". Y además desaparecieron elementos de prueba: "Nunca entraron al sumario evidencias que se sabe, estaban en el sitio, como colgares, algunas armas de fuego, entre otras".

FOTOGRAFÍAS COMO ESTAS, no fueron incorporadas inicialmente a la investigación. Quiénes las tomaron las guardaron.

LO QUE SE SABE Y LO QUE FALTA

Hace dos meses y medio, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos contra 10 policías comenzó a aclararse una parte de lo ocurrido en Guaitarilla.

La investigación aseguró que los siete miembros del Gaula que murieron a manos del Ejército así como los cuatro civiles que los acompañaban se dirigían a Guaitarilla para robarse un cargamento de cocaína de común acuerdo "muy probablemente" con la banda "Los tiritingos".

Como si fueran poco, esas cuatro autoridades judiciales, en criterio de la Procuraduría, "sucumbieron ante las acaloradas discusiones que se presentaron entre miembros de la Policía y del Ejército, que no tenían por qué estar en la escena y mucho menos forzar decisiones, como la de recoger abruptamente los cuerpos".

A la hora de hacer la inspección de los cadáveres, el fiscal encargado decidió subirlas a un camión del Ejército para llevarlas a la morgue de Medicina Legal de Pasto, con todas las evidencias (armas, vehículos, prendas de vestir, vainillas, proyectiles, etc.), "cuando debió culminar el levantamiento en el mismo sitio, para preservar y dejar registradas las condiciones originales en que se halló".

De hecho, dice la Procuraduría, uno de los cuerpos arrojó a la morgue, de manera inexplicable, "maniatado con

cinta adhesiva", elemento que nunca se vio en los videos. Pero eso no es el único cuestionamiento al fiscal del caso. El hombre, que para el efecto era la autoridad judicial principal, solo llegó al lugar de los hechos pasadas las 2 de la tarde del 20 de marzo, "cuando debió presentarse en las primeras horas de la mañana". Para esa hora, y teniendo en cuenta que no se aisló como es debido el sitio, ya la escena de los hechos estaba "contaminada" y los elementos de prueba "manipulados".

La Fiscalía además, luego de hacer el examen a la ropa de los muertos, decidió inclinarse, lo cual, según la Procuraduría, limitó evaluaciones posteriores. Y, como remate, a pesar de que el confuso episodio se dio el 19 de marzo, la Fiscalía solo practicó una inspección al lugar de los acontecimientos el 23 de marzo.

La Policía tampoco se salvó

El fiscal del caso decidió recoger cuerpos y evidencias y llevarlos a la morgue.

de los muertos, decidió inclinarse, lo cual, según la Procuraduría, limitó evaluaciones posteriores. Y, como remate, a pesar de que el confuso episodio se dio el 19 de marzo, la Fiscalía solo practicó una inspección al lugar de los acontecimientos el 23 de marzo.

'MILITARES IBAN A LA FILIA'

La Procuraduría solicitó ayer a la Justicia Penal Militar revocar su decisión de archivar la investigación contra 12 militares implicados en el caso de Guaitarilla.

Para el Ministerio Público el Ejército "debía llevar a cabo labores de inteligencia —que no se hicieron— antes de decidir qué tipo de acción militar se necesitaba".

Según la Procuraduría, en boletín de prensa difundido ayer, "la apreciación que se tiene es que a sabiendas de no tratarse de un grupo armado (Auc o guerrilla), se preparó el operativo para darles de baja".

En ese orden de ideas, solicita a la Justicia Militar, vincular a la investigación al jefe de Operaciones y al Comandante del Batallón Boyacá que firmaron la orden de operaciones, a partir de la información dada por un delator.

Además se solicita abrir investigación penal en contra de un cabo y un soldado encargados de informar de la llegada "al sitio de la emboscada" de los cuatro vehículos de los policías y civiles.

La Justicia castrense archivó el caso de los militares en octubre pasado argumentando que se trataba de un acto del servicio y que las muertes se produjeron por combate.

de las recriminaciones del Ministerio Público, no solo se considera que no debió ser la Sijin Nariño la encargada de investigar, pues algunos de sus hombres estaban implicados, sino que el celular de uno de los muertos, que nunca se incorporó en la investigación, luego fue entregado "en condiciones extrañas a un particular" por miembros de la Policía.

También, la Procuraduría repara en que un senador aportó "elementos de prueba obtenidos ilegítimamente", como interceptones telefónicas y registros de llamadas. No es específica de qué congresista se trata, pero el senador Luis Elmer Arenas —oficial retirado de la Policía— presentó en un debate en el Congreso pruebas como las mencionadas.

En la morgue, ocurrieron otras tantas irregularidades (ver 'Los errores' de Medicina).

La pelea

En su momento, EL TIEMPO informó sobre los roces que se produjeron entre las autoridades que llegaron esa mañana a Guaitarilla.

El mayor del Ejército Ernesto Coral Rosero, jefe de Operaciones del Batallón Boyacá, con sede en Pasto, acusó al general Alonso Arango, subdirector de la Policía Nacional, de haber obstaculizado la labor de una juez penal militar en la escena del crimen y de irrespetar un retén, instalado para garantizar las diligencias judiciales.

"Arribaron (Arango y otro oficial) en dos vehículos Nissan, tres vehículos con personal de carabineros, una camioneta roja con vidrios polarizados sin placa, armados, unos de civil y otros uniformados", escribió Coral en un documento, con fecha del 25 de marzo.

Y agregaba: "Trataron de arrojar al comandante del retén (...) entraron al sector sin respetar el dispositivo de seguridad de la trupe en el área".

El mayor Coral Rosero fue relevado de su cargo unos días después por el presidente Álvaro Uribe "por indisciplina en el manejo de la información".

El general Arango negó que los hechos hayan ocurrido así: "En un área protegida por soldados nadie puede llegar a hacer lo que dicen que hicieron (...) Llegué casi 12 horas después y allí estaba una juez militar y tomamos unas fotos", argumentó y reconoció que la única discusión que se presentó se debió al traslado de los cadáveres.

No obstante las dificultades, la Procuraduría sigue adelante. Ayer mismo, le pidió a la Justicia Militar que reabra la investigación contra militares (ver 'Militares iban a la filia').

LOS 'ERRORES' DE MEDICINA LEGAL

En la morgue de Nariño, según el procurador Edgardo Maya, se dieron las siguientes irregularidades.

BALAS OLVIDADAS. De los cuerpos de las 11 personas a las cuales se les practicó la necropsia en las primeras 36 horas solo se recuperó un proyectil de arma de fuego. Después, tras las ocho necropsias hechas por la Procuraduría, se recolectaron cerca de 30 municiones.

LIGEREZA CON TESTIGO. Un mes después de ocurridos los hechos, murió uno de los pocos testigos, el civil Jesús Hernando López Herra. El médico, dice la Procuraduría, no observó la radiografía ni la historia clínica que daban cuenta de la presencia de varios elementos tanto fuera como dentro del cuerpo. Algunos los recuperó luego personal de la funeraria y los funcionarios que hicieron la exhumación.

A OJO. Durante las necropsias no se tomaron muestras a los cuerpos en las zonas donde se presumía existían residuos de disparo, el análisis se basó en las conclusiones a las que lle-

gó el forense a partir "únicamente de la observación y la experiencia".

¿DETALLES? NO ADVERTIDOS? "Los protocolos de necropsia dan cuenta de equivocaciones manifestadas en la descripción de las heridas, tanto externas como internas, al punto de haberse descrito lesiones que no existían y haber dejado de detallar otras que sí se hallaron". No se detalló por ejemplo la fractura en el maxilar de una de las personas muertas que podría tener que ver con golpes recibidos con algún arma contundente (ejemplo, la culata de un fusil) que podría llevar a pensar que hubo tiempo de enfrentamiento cuerpo a cuerpo antes de los disparos.

NO ENTREGARON TODO. El personal de médicos que practicó las necropsias tomó fotografías y video de estos procedimientos, que dan cuenta de los lesiones halladas, los cuales no fueron aportados a la autoridad judicial y solo se conocieron con posterioridad, por solicitud de funcionarios de esa misma institución que requirió rendir un dictamen.